



e-l@tina

Revista electrónica de estudios latinoamericanos

[e-l@tina](#) es una publicación del
Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina ([GESHAL](#))
con sede en el
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe ([IEALC](#))
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

El debate acerca de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas en la Argentina, 1955-1975*

Gonzalo Sanz Cerbino

Doctor en Historia recibido en la Universidad de Buenos Aires, docente en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y becario posdoctoral del CONICET, con investigación radicada en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Correo electrónico: camilogx@yahoo.com

Recibido con pedido de publicación: 25 de noviembre de 2014.

Aceptado para publicación: 15 de septiembre de 2015.

Resumen

El debate acerca de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas en la Argentina, 1955-1975*

El conflicto agropecuario de 2008 puso en el foco del debate la unidad entre las corporaciones rurales que se expresó en la conformación de la Mesa de Enlace. Los enfrentamientos internos que dividieron por muchos años a las diferentes capas de la burguesía agropecuaria habían pasado a segundo plano, por lo que correspondía preguntarse si la unidad era anecdótica o expresaba tendencias de largo plazo. En este artículo nos proponemos reconstruir los debates en torno al problema de la unidad corporativa del agro pampeano entre 1955 y 1975, y avanzar, a su vez, en los logros concretos que se materializaron en la conformación de diferentes frentes entre corporaciones rurales en ese período. De esta manera, buscamos aportar al debate sobre las transformaciones acaecidas en el agro pampeano en los últimos 50 años y sus consecuencias.

Palabras claves: burguesía agraria; corporaciones empresarias; unidad; política agropecuaria.

Summary

The debate about the unity of the pampas rural groups in Argentina, 1955-1975

The agrarian conflict of 2008 brought into focus the debate about the unity among rural corporations, which expressed in the creation of the Liaison Bureau. The inner conflicts that divided for many years to different layers of the agrarian bourgeoisie had passed to a second place. It is appropriate to ask whether the unity was anecdotal or expressed a long-term trend. In this article we propose to reconstruct the debates around the issue of the agrarian's corporate unit between 1955 and 1975, and, at the same time, to analyze the concrete results that were materialized in configuration of different rural fronts between rural corporations in that period. Thus, we seek to contribute to the debate on the transformations in the Pampa's agriculture in the last 50 years and its consequences.

Keywords: agrarian bourgeoisie; interest groups; unity; agricultural policy.

*Agradezco los comentarios recibidos de los evaluadores anónimos en el proceso de referato de este artículo que me han permitido enriquecer la primera versión del mismo.

Introducción

En marzo de 2008 se abrió un conflicto que enfrentó, de un lado, al gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, y del otro a la burguesía agropecuaria pampeana. El motivo de la disputa era una medida tendiente a modificar el régimen de impuestos a las exportaciones primarias (la resolución N° 125), que establecía alícuotas móviles en un contexto de precios internacionales en alza. Aunque solo las exportaciones de soja, el cultivo de exportación más importante en el país, se verían afectadas en lo inmediato por un aumento significativo en la tributación, la medida fue percibida como un intento de elevar sustantivamente la contribución del agro a la economía fiscal. El conflicto se extendió por varios meses, en los que la burguesía agropecuaria recurrió a la movilización y al “paro” (suspensión de la comercialización de productos primarios) para enfrentar la medida. Además, el sector agropecuario alcanzó una notable unidad de acción, que se expresó en la confluencia de sus corporaciones más representativas en la Mesa de Enlace. Ésta sumó tanto a la Federación Agraria Argentina (FAA), representante tradicional de los pequeños productores (hoy mayormente propietarios), como a la Sociedad Rural Argentina (SRA), que nucleó históricamente a la gran burguesía terrateniente. El frente incluyó también a la burguesía agropecuaria media de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y a las cooperativas reunidas en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).

Esta unidad alcanzada por capas diferentes -y por mucho tiempo enfrentadas- de la burguesía rural fue uno de los datos más significativos del conflicto. No solo llamó la atención de la opinión pública, sino también de los científicos sociales abocados al estudio del agro pampeano. Varios autores destacaron la unidad alcanzada por el “campo” e intentaron explicarla (Basualdo, Arceo y Arceo, 2009; Barsky y Dávila, 2008; Sartelli et al., 2008; Balsa y López Castro, 2011 y Gras, 2011). En general, se atribuyó la confluencia a una serie de transformaciones estructurales que algunos autores remontan a las décadas de 1960 y 1970 (Barsky y Dávila, 2008; Balsa y López Castro, 2011; Sartelli et al., 2008) y otros circunscriben a la década del '90 (Gras, 2011; Lissin, 2010). El dato resaltado por todos es el proceso de concentración y centralización del capital, que elevó la escala mínima de las explotaciones, y el acceso a la tierra de los pequeños arrendatarios, lo que tendió a homogeneizar las bases de las corporaciones rurales. Esto ya había sido señalado hace tiempo por autores como Martínez Nogueira (1985), Lattuada (2006) y Manzetti (1992). Sin embargo, los trabajos sobre la intervención política de las corporaciones agropecuarias en las décadas de 1960 y 1970 siguieron poniendo de relieve los enfrentamientos entre las corporaciones que expresaban los intereses de las capas más débiles de la burguesía agropecuaria pampeana (FAA) y aquellas que nucleaban a la gran burguesía terrateniente, como SRA o CRA (Balsa, 2011; Lázzaro, 2005; Makler, 2006; Palomino, 1988 y 1989).

Recién tras el impacto causado por el conflicto de 2008 se activó una línea de investigación que intentó “historizar” esta confluencia. Algunos autores han comenzado a abordar el problema de la unidad corporativa en el agro desde una perspectiva histórica, intentando encontrar los antecedentes de la Mesa de Enlace. Muchos de ellos han remontado los procesos de acercamiento y unidad a la acción de las corporaciones agropecuarias pampeanas en la década del '90 (Gras, 2011 y Salvia, 2014), destacando la confluencia de FAA, CRA y SRA en los paros agrarios realizados en aquella década. Otros trabajos rastrearon antecedentes hasta la década de 1970 (Pérez Trento, 2014; Sanz Cerbino, 2014 y Poggi, 2012), en donde se observan procesos de convergencia similares a los de 2008.

Estos antecedentes se produjeron en medio de un intenso debate, desarrollado entre las décadas de 1960 y 1970, acerca de la conveniencia o no de una confluencia de las diferentes capas de

la burguesía agropecuaria y sus representaciones corporativas.¹ Un debate impensado apenas unos años antes, cuando las disputas internas primaban en el medio agropecuario. En este artículo reconstruiremos esas discusiones, y los avances concretos en que ellas cristalizaron: la conformación de distintos frentes, con grados diversos de alcance y formalidad. Repasaremos los elementos que habilitaban la confluencia, así también como los problemas que dividían a las corporaciones agropecuarias. Intentaremos, de esta forma, iluminar ciertos aspectos de la historia de las corporaciones agropecuarias pampeanas que aportan a la comprensión de fenómenos recientes, como la conformación de la Mesa de Enlace en 2008.

De la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias a la Comisión de Enlace

Uno de los primeros pasos dados en pos de unificar corporaciones agropecuarias anteriormente enfrentadas fue la conformación de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias (CCEA), que reunió a CRA y SRA en 1958. Vale la pena recordar que hasta ese momento ambas corporaciones arrastraban una historia conflictiva. La entidad de segundo grado más poderosa en el seno de CRA era la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), formada por ganaderos escindidos de SRA en los años '30 por el conflicto que enfrentó a “criadores” e “invernadores” (Smith, 1986). Sin embargo, las tensiones entre ambas entidades poco a poco fueron diluyéndose. Hacia la década de 1940 comenzó a verificarse un acercamiento en sus posicionamientos políticos, al mismo tiempo que muchos dirigentes agropecuarios comenzaron a desempeñar cargos simultáneamente en ambas entidades (Giberti, 1970; Martínez Nogueira, 1985; Palomino, 1988 y 1989). Este acercamiento alcanzó su punto más alto en 1958, cuando se creó CCEA.

La formación de CCEA es producto de una preocupación común a los propietarios de tierras representados por SRA y CRA: el problema de los arrendamientos. Desde la década de 1940, para impedir el desalojo masivo de arrendatarios ante la crisis agrícola, el Estado intervino en el mercado de arriendos, fijando precios y prorrogando los contratos. Esa intervención se mantuvo durante toda la década peronista y ni siquiera un gobierno como el surgido del golpe de estado de 1955, políticamente afín a los terratenientes, levantó las regulaciones. En 1958, reconociendo su incapacidad para encauzar la crisis política, las autoridades militares convocaron a elecciones. A pesar de los recaudos tomados para impedir la presentación del peronismo, un acuerdo de esta fuerza con el candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, permitió que los intereses reformistas se impongan en las elecciones. En materia agropecuaria, Frondizi se pronunció a favor de una inmediata reforma agraria, instrumento destinado a resolver el conflicto entre arrendatarios y terratenientes. Además, se pronunció contra los “monopolios” comercializadores, lo que traía a la

¹ Estos debates, protagonizados por dirigentes corporativos del agro pampeano, hacían referencia a la conveniencia de alcanzar la “unidad del campo”. Como veremos a lo largo de este artículo, con ello hacían referencia a las supuestas ventajas derivadas de la articulación de un frente común entre las corporaciones representativas de las distintas capas de la burguesía agropecuaria pampeana, para enfrentar con más fuerza las políticas sectoriales que consideraban negativas. Esto implicaba la confluencia de las cuatro corporaciones más importantes (FAA, CRA, SRA y CONINAGRO) detrás de objetivos y reclamos compartidos, superando sus contradicciones y enfrentamientos. Esta expresión de deseos de la dirigencia corporativa agropecuaria pocas veces se alcanzó durante los años bajo estudio (solo con la conformación de la Comisión de Enlace, entre 1970 y 1973). En otros momentos se logró articular frentes más acotados, en los que sin embargo confluyeron corporaciones que tenían fuertes divergencias. Cuando a lo largo de este artículo hablemos de “unidad”, lo haremos retomando el sentido que los dirigentes agropecuarios que la postulaban como horizonte le daban en este contexto.

memoria de los terratenientes la experiencia del IAPI bajo el gobierno peronista,² cuando el comercio exterior fue centralizado en este organismo estatal. Los terratenientes reaccionaron impulsando la creación de CCEA, constituida pocos meses después del triunfo electoral de Frondizi. En octubre de 1958, CCEA realizó la “Primera Asamblea de Productores Rurales”, en la que se aprobó una “Declaración de principios” que llamó a luchar “para que se respete en forma integral el derecho de propiedad del productor agropecuario” y se pronunció a favor de “la libertad de comercio y el restablecimiento de la libre competencia en la [...] comercialización [...] de los productos del agro” (Makler, 2008: 17).

Por fuera de este frente se ubicaban claramente FAA y CONINAGRO (cuya dirección estaba en manos de las cooperativas ligadas a FAA), que se inclinaban por una solución al conflicto por la tierra que permitiera el acceso a la propiedad de los arrendatarios. En su campaña, FAA no se privaba de denunciar a los terratenientes representados por SRA, cuya propuesta de “liberar” el mercado de arriendos (según sostenía la corporación de pequeños productores) derivaría en una profunda crisis social y política, provocando la expulsión masiva de agricultores arrendatarios (Lázzaro, 2005). En la práctica, la burguesía agropecuaria se encontraba dividida en dos bloques enfrentados, aunque el debate por alcanzar una unidad más amplia ya estaba sobre la mesa. En febrero de 1965, ante la convocatoria a una nueva Asamblea Agropecuaria por parte de CCEA, se cursaron invitaciones a los dirigentes de FAA y CONINAGRO. Los organizadores señalaron que pretendían realizar una asamblea de la que participen los productores agropecuarios “sin distinción de agrupaciones”, a fin de “manifestar a las autoridades nacionales que los hombres de campo permanecen unidos” frente a los problemas que los aquejaban (*Clarín*, 30/1/1965). Aunque las máximas autoridades de FAA y CONINAGRO declinaron la invitación, saludaron la iniciativa y destacaron “la unidad de criterios que existen en estos momentos en los diferentes movimientos agropecuarios” (*Clarín*, 30/1/1965).

¿Qué reclamos compartía el conjunto de la burguesía agropecuaria que permitían poner sobre la mesa un acercamiento impensado años atrás? Ambos bloques venían cuestionando la política agropecuaria, en particular desde la asunción de Arturo Illia a la presidencia. Según su lectura, esta política generaba “desaliento” en los productores, lo que llevaba al sector a la crisis (SRA: *Memoria y Balance 1965-1966*; *La Tierra*, 25/1/1966; FAA: “Política agropecuaria efectiva, CERO”; *La Nación*, 19/2/1966). El principal problema identificado era el deterioro de sus ingresos, que achacaban a los distintos instrumentos desplegados por el gobierno para capturar y redirigir la renta agraria. Aquí se unían, casi sin distinción, reclamos por el peso de los impuestos, en particular las retenciones a la exportación de productos rurales, y para ajustar el tipo de cambio que sobrevaluaba la moneda local, restando recursos a los exportadores (*La Tierra*, 15/4/1966; *La Nación*, 22/4/1966). Ambos sectores relacionaron la sangría de recursos del sector agrario con las necesidades de sostenimiento del Estado nacional. Por eso, entre sus demandas aparecía regularmente el reclamo por la “racionalización” de la administración pública, el recorte de gastos y el saneamiento de las empresas estatales. Valga como ejemplo el balance que hacía *La Tierra*³ de la situación en enero de 1966:

² El IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio) fue un organismo creado en 1946 durante el gobierno dictatorial de Edelmiro Farrell, cuyo objetivo era centralizar el comercio exterior en la Argentina. Durante la primera presidencia de Perón (1946-1952), el organismo operó como el instrumento privilegiado para captar y redistribuir la renta agraria, por la diferencia entre los precios pagados en el mercado interno por el instituto y los precios internacionales.

³ *La Tierra* era el órgano de prensa oficial de Federación Agraria Argentina, de periodicidad semanal, en donde se publicaban noticias sobre el sector agropecuario, informaciones de índole gremial y las posiciones políticas de la dirigencia de la entidad.

Impulsados por la creciente necesidad de fondos que demandan los abultados déficits fiscales y los compromisos financieros internacionales, el Estado ha seguido una política cambiaria sumamente perjudicial para el campo, ya sea a través del control al mercado de divisas o por medio de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios (*La Tierra*, 25/1/1966).

Pero no era este el único punto en que coincidían FAA y SRA. Otro tema que preocupaba al conjunto de las corporaciones agropecuarias era la conflictividad obrero-patronal, que venía en alza desde que la Confederación General del Trabajo (CGT) había lanzado un plan de lucha en 1963. Bajo la presidencia de Illia las huelgas se multiplicaron, afectando en particular el transporte y la comercialización de productos primarios. Desde 1964 se agregó una nueva preocupación: las huelgas de peones rurales en el sur de la provincia de Santa Fe, que paralizaron las cosechas y garantizaron la conquista de mejoras salariales. Ante este problema, las corporaciones agropecuarias actuaron como un solo bloque, denunciando la “pasividad” oficial y exigiendo a las autoridades el disciplinamiento de los peones rurales. No se privaron tampoco de denunciar una supuesta “conspiración comunista” que se encontraría detrás de los conflictos, para lo que se demandaba el “restablecimiento del orden” (*La Tierra*, 11/2/1966 y 4/3/1966; SRA: *Memoria y Balance 1965-1966*: 72). Las patronales del agro se sumaron así al coro de representantes de la clase dominante que, exigiendo “orden y disciplina”, se encolumnaron detrás de las Fuerzas Armadas que en junio de 1966 derrocaron a Illia (Míguez, 2013).

Aunque tanto FAA como CCEA recibieron con entusiasmo un golpe que prometía “sanear” la economía y el déficit público, al mismo tiempo que imponer el orden y disciplinar al movimiento obrero,⁴ pronto volverían a aflorar las diferencias. En 1967 el gobierno dictatorial impuso una solución al conflicto por los arrendamientos, levantando la prórroga de los contratos y eliminando la intervención estatal sobre ese mercado. La medida fue aplaudida por los grandes terratenientes, nucleados en CRA y SRA, pero fue cuestionada fuertemente por FAA y CONINAGRO. Utilizando *La Tierra* como tribuna, denunciaron tanto al gobierno como a las corporaciones que apoyaron la iniciativa (*La Tierra*, 27/7/1967, 31/8/1967 y 18/4/1968). Incluso intentaron articular, sin éxito, un movimiento de “chacareros desalojados” (*La Nación*, 30/4/1968). Pero, como reconocieron los propios dirigentes de FAA, no hubo finalmente desalojos masivos y violentos, y los pocos arrendatarios afectados optaron por resolver individualmente los conflictos (*La Tierra*, 19/12/1968). Es que, para los años '60, una serie de transformaciones estructurales habían restado importancia al arriendo como vía de acceso a la producción agropecuaria. Durante los casi 25 años de intervención estatal, muchos arrendatarios habían logrado acceder a la propiedad de sus predios, aprovechando las facilidades crediticias brindadas por diferentes administraciones o la caída de precios de la tierra como resultado de la intervención. Muchos otros terminaron retirándose de la producción al no alcanzar las nuevas escalas impuestas por los avances tecnológicos, o fueron expulsados por los terratenientes. Lo cierto es que en la Región Pampeana, según datos censales, entre 1947 y 1969 los propietarios que explotaban su parcela pasaron del 52,1 al 73,1%, y los arrendatarios del 37,5 al 18% (Barsky, 1997).

Estas transformaciones, junto al aumento de la escala mínima como resultado de los procesos de concentración de la producción, achicaron las distancias entre las bases de FAA y las de SRA y

⁴ El respaldo de SRA y CARBAP al golpe de estado de 1966 ha sido bien documentado (O'Donnell, 2009; Palomino, 1988 y 1989), pero no es tan conocida la posición de FAA. Sin embargo, en *La Tierra* pueden encontrarse declaraciones de respaldo a las nuevas autoridades (*La Tierra*, 1/7/1966, 7/8/1966 y 15/7/1966), y el apoyo a las medidas más controvertidas de la dictadura, como la represión de los conflictos sindicales (*La Tierra*, 15/7/1966, 9/9/1966 y 25/11/1966) o la exigencia de avanzar decididamente en el saneamiento del déficit público (*La Tierra*, 17/3/1967).

CRA (Martínez Nogueira, 1985; De Ímaz, 1967). Eliminado el problema de los arrendamientos, se abría la posibilidad de una convergencia que la política agropecuaria instrumentada por el gobierno dictatorial, en un contexto de caída de los precios internacionales de las materias primas, terminó facilitando. A comienzos de 1967 se reimplantaron las retenciones a la exportación de productos primarios, cuestionadas por todas las corporaciones rurales. A ellas se agregaron nuevas medidas gubernamentales que apuntaban a captar o redirigir parte de los ingresos provenientes de la renta diferencial, como el impuesto a las tierras aptas de 1968 o las restricciones a la comercialización de carne aplicadas desde 1970 para controlar la inflación.

Desde 1968, entonces, comenzó a verificarse la convergencia de FAA, SRA, CRA y CONINAGRO en defensa de las ganancias extraordinarias provenientes de la renta, que la política gubernamental, vía retenciones, arrebató a la burguesía agropecuaria. Los dirigentes de las cuatro entidades comenzaron a reunirse periódicamente y a emitir documentos conjuntos objetando medidas oficiales (*La Nación*, 15/4/1970, 28/5/1970 y 4/8//1970). A mediados de 1970 se multiplicaron las asambleas y actos en todo el país, en los que se denunció el “ahogo” del campo como resultado de la política agropecuaria nacional (*La Tierra*, 16/7/1970, 6/8/1970 y 28/8/70). Una asamblea de particular importancia se desarrolló en Tres Arroyos, Buenos Aires, el 8 de agosto de 1970. La misma fue convocada por FAA y CARBAP, junto a otras corporaciones regionales. Es decir, por corporaciones pertenecientes a los dos bloques agrarios que hasta poco antes habían actuado por separado. Sin duda, constituyó un hito en el proceso de confluencia que se venía desarrollando. Allí se reunieron más de 1.200 delegados, entre ellos los máximos dirigentes de CARBAP y FAA. Esta asamblea, en sintonía con el clima imperante, votó solicitar a las “entidades madres del movimiento agropecuario” la convocatoria a una reunión nacional en Capital Federal, para demostrar al gobierno “la unidad de propósitos” del campo. (*La Nación*, 9/8/1970). En septiembre se realizó una nueva asamblea conjunta de FAA y CARBAP en la localidad bonaerense de Rivadavia (*La Tierra*, 17/9/1970 y *La Nación*, 27/9/1970). Allí, Antonio Di Rocco, presidente de FAA, resaltó “la coincidencia de ideas de todos los sectores gremiales” e instó a la “unidad de los productores, ya que el aislamiento y la incomunicación resultan ahora actitudes suicidas frente al panorama actual del campo” (*La Nación*, 19/9/1970). Las referencias a la necesidad de alcanzar la “unidad del campo” fueron reiteradas en documentos conjuntos presentados a las autoridades (*La Nación*, 4/8/1970) y en el Congreso Anual de FAA, del que participaron dirigentes de CRA (FAA: *58° Congreso Anual. Conclusiones*).

Finalmente, los esfuerzos fructificaron en la convocatoria a una asamblea conjunta por parte de SRA, FAA, CRA y CONINAGRO, en la que se discutiría la conformación de un frente común. La asamblea, realizada los días 26 y 27 de octubre de 1970 en Rosario, Santa Fe, contó con la participación de lo más granado de la dirigencia agropecuaria. Quienes se expresaron en ella coincidieron en criticar la política económica oficial, en particular, la exacción de renta instrumentada por el gobierno a través de mecanismos fiscales y cambiarios. También se insistió una y otra vez en la necesidad de unificar a las cuatro corporaciones agropecuarias para enfrentar tal política, y ese fue el compromiso al que se arribó al concluir la segunda jornada (*La Nación*, 26 y 27/10/1970). El frente se formalizaría en una segunda asamblea, realizada en noviembre de 1970 en el local de la SRA en Palermo (Capital Federal), en el que se dieron cita 10.000 delegados provenientes de todo el país. Allí se resolvió la conformación de la Comisión de Enlace, el frente que integrarían las cuatro corporaciones que convocaron al encuentro (*La Nación*, 18 y 19/10/1970). Se votó a su vez un programa, que cuestionaba la política agropecuaria de los últimos 30 años, objetando la exacción permanente de recursos al agro destinados (según sostiene el documento) al sostenimiento de un estado sobredimensionado, una burguesía industrial ineficiente y un nivel de consumo de las masas incompatible con el crecimiento de la única actividad económica capaz de impulsar el desarrollo del país: el agro (*El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones*). El programa, expresión cabal de aquello que se

dio en llamar “liberalismo”, era profundamente impopular, ya que demandaba no solo avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero, sino también sobre el entramado industrial creado al calor de la protección estatal.

La Comisión de Enlace se mantuvo funcionando hasta 1973, e incluso alcanzó un éxito importante al lograr imponer a uno de sus impulsores, el presidente de FAA Antonio Di Rocco, como Ministro de Agricultura y Ganadería en 1971. Sin embargo, la nueva coyuntura política y económica abierta en 1972 conspiró contra los esfuerzos unitarios. El aumento de los precios internacionales de las mercancías agropecuarias restaba urgencia a la necesidad de unirse para combatir la apropiación estatal de renta, mientras que el ascenso de la lucha de clases motorizado por el ciclo insurreccional abierto tras el Cordobazo de 1969, obligaba a ensayar políticas reformistas que contuvieran la agitación popular. La Comisión de Enlace no sobrevivió a los desafíos de la nueva etapa que se abría en el país, aunque el debate por la unidad del campo seguiría latente.

El debate por la unidad, entre el retorno del peronismo y la crisis de régimen

La alternativa reformista, cuyo programa se expresaba en las propuestas de la alianza de la burguesía más débil, nucleada en la Confederación General Económica (CGE), y la Confederación General del Trabajo (CGT), encontró en el peronismo al personal político más adecuado. Estos sectores delinearón el plan económico que se implementaría tras las elecciones, en 1973, que auguraba para el agro una política de reformas estructurales y el rol de principal aportante de recursos para sostener un esquema de protección del mercado interno. Ante estas alternativas, el frente agropecuario se dividió. De un lado quedaron las corporaciones que promovieron el retorno del peronismo, entendiendo que las reformas eran necesarias para dar contención al descontento social y aspirando a beneficiarse de una segmentación de la carga impositiva. Es decir, que las pequeñas explotaciones tributarán proporcionalmente menos que las grandes. Era el caso de FAA, que aportó funcionarios al gobierno peronista y acercó proyectos que fueron contemplados por el Ejecutivo. De otro lado se ubicaron corporaciones como CRA y SRA, que desde 1972 cuestionaron cualquier propuesta de reforma que pusiera en duda la propiedad privada de la tierra. Sin embargo, dentro de estas corporaciones surgieron líneas internas de oposición que, al igual que FAA, entendieron que debían acercarse al gobierno peronista (Sanz Cerbino y Baudino, 2013). También FAA tuvo que enfrentar disidencias internas, pero en este caso, que cuestionaban su acercamiento a un gobierno que avanzaba fuertemente sobre la renta agraria. La división del agro cruzó internamente a cada una de las corporaciones, en las que comenzaron a distinguirse dos tendencias: una de signo anti-reformista, que cuestionaba en primer lugar la exacción de recursos destinados a proteger el entramado industrial urbano y, en segundo lugar, las iniciativas de reforma de la estructura productiva. Del otro lado, la tendencia filo-reformista propiciaba el acercamiento al gobierno, aceptaba críticamente la exacción de renta a través de la centralización estatal del comercio de granos y carnes, los impuestos y el tipo de cambio, al mismo tiempo que impulsaba las transformaciones estructurales, considerando que se trataba, en el peor de los casos, de un “mal necesario” que contribuiría a encauzar la situación política (Sanz Cerbino y Baudino, 2013).

La discusión sobre la unidad del campo no desapareció en este contexto, pero sí adquirió otros ribetes: entre 1973 y 1975 los dos sectores enfrentados propiciaron una unidad con contenidos políticos diferentes. Frente a los primeros disensos entre las corporaciones agropecuarias y el gobierno, por los “bajos precios” definidos para los granos, el sector más decididamente anti-reformista, nucleado en CARBAP, lanzó una primera convocatoria unitaria. El conflicto por los precios, que había suscitado planteos críticos de SRA y FAA, y que incluso derivó en la renuncia Avelino Strólogo (un dirigente de FAA) a la Secretaría de Agricultura, fue percibido como una oportunidad por los dirigentes anti-reformistas de CARBAP. Así, en julio de 1973, esta entidad llamó a conformar “un gran movimiento de opinión de las bases productoras, en salvaguardia de las leyes

de carnes y de granos [...], a fin de aprobar un pronunciamiento del Frente Verde, que inicie el planteo de fondo, de una política nacional agropecuaria permanente para el mediano y largo plazo” (*La Nación*, 7/7/1973). La convocatoria tenía como ejes la crítica a la política de precios, la presión fiscal y las “amenazas” a la propiedad privada. Se materializaría en una serie de asambleas, que terminarían confluyendo en el congreso anual de CARBAP, celebrado en agosto de 1973 en Trenque Lauquen. Aunque ninguna corporación acompañó la iniciativa, la dirigencia de CARBAP insistió. En el congreso de Trenque Lauquen, el discurso de cierre a cargo de Jorge Aguado atribuyó la escasa incidencia del sector en la definición de la política agropecuaria a “la falta de unión de los productores y de unidad de acción en las entidades agropecuarias” (*La Nación*, 19/8/1973). Una de las resoluciones votadas en ese congreso fue la constitución de una comisión de acción gremial, destinada a bregar por la unificación de las corporaciones. Esa comisión organizó una asamblea extraordinaria dedicada exclusivamente a discutir el asunto, el 20 de octubre de 1973 en Santa Rosa, La Pampa. El documento votado allí realizaba un llamado al resto de las corporaciones rurales para alcanzar “la unión de las organizaciones representativas del campo” (Aguado, 1977: 99). En sintonía con lo resuelto en la asamblea, CARBAP remitió telegramas a todas las corporaciones a fin de iniciar gestiones para la conformación del frente. Pero aunque el “tenor de las respuestas [fue] ampliamente comprensivo” (Aguado, 1977: 100), el acercamiento no se materializaría hasta mucho más adelante. Es que, a diferencia de CARBAP, en el resto de las corporaciones aún dominaban los sectores dispuestos a no confrontar con el gobierno. Esto quedó de manifiesto en la firma del “Acta de compromiso” entre el gobierno y las corporaciones agropecuarias, que todas menos CARBAP suscribieron en septiembre de 1973. Allí las corporaciones se comprometían a acatar las reformas oficiales, mientras que las autoridades aceptaban estimular al sector con “precios remunerativos”. A su vez, se creó una Comisión de Política Concertada, en la que funcionarios y dirigentes corporativos discutirían las medidas para el agro.

La corporación más reacia a una confluencia con los sectores anti-reformistas era FAA, que se vio obligada a responder a la iniciativa unitaria de CARBAP marcando sus límites. Así, aunque reconocía “la importancia que esta ‘unidad’ tiene, y [...] la premura con que debe ser llevada a cabo” (*La Tierra*, 16/1/1974), explicaba qué:

Nadie debe confundirse ni tratar de confundirnos sobre los alcances de esa unidad. La acción conjunta debe hacerse entre los iguales, entre los que tienen problemas comunes y buscan soluciones comunes. Si quisiéramos unir a todo el sector agropecuario, lograríamos quizás un gran movimiento, pero el mismo sería tan heterogéneo en su conformación, que correría el riesgo de poder ser utilizado para lo que el país no quiere que sirva. La unidad debe ser de la gran mayoría del sector, de los que realmente son auténticos productores. Por eso deben quedar al margen los que lucran con el sacrificio del auténtico productor. Debe ser un formidable instrumento para el cambio, y no una aprovechada herramienta para el estancamiento [...]. En procura de esa unidad estamos dispuestos a seguir mostrando con toda claridad cuál es nuestro pensamiento, y a escuchar todas las posturas que se nos quieran hacer conocer a favor de su concreción. A lo que no estamos dispuestos, es a arriar las banderas del crecimiento económico y de la más justa distribución de los ingresos. Si lo hiciéramos, estaríamos renegando de nuestro pasado y frustrando nuestro futuro [...] (*La Tierra*, 16/1/1974).

Al planteo de FAA, de una unidad de la pequeña y mediana burguesía agropecuaria para defender el programa reformista oficial, la dirigencia de CARBAP contraponía una unidad estructurada en torno a la independencia del gobierno y de la CGE (Aguado, 1977: 50-51). La conformación de un frente agrario afín a los planteos reformistas del gobierno era impulsado

también por la CGE, que intentó, en mayo de 1974, sumar a CRA a la Confederación Económica. Sin embargo, este acercamiento fue combatido por la dirigencia de CARBAP, que integraba CRA. Un comunicado de esta entidad dejó en claro su posición:

- 1º) Reafirmar que CARBAP participe y apoye las gestiones tendientes a lograr la unidad gremial de los productores agropecuarios, con la participación de las instituciones y organizaciones representativas del sector, de acuerdo con los mandatos de Trenque Lauquen y Santa Rosa.
- 2º) Que para dicha formalización, exige el mantenimiento de la individualidad de CARBAP y una expresa independencia de la CGE (CARBAP: *Memoria y Balance 1973-1974*: 157).

La integración de CRA a la CGE fue propuesta en los cuerpos directivos de la entidad, y aunque la votación fue dividida, se impuso la posición de mantener la independencia del gobierno (*Cronista Comercial*, 18/5/1974 y 30/5/1974). Esto estaba dando cuenta de un cambio en el clima político entre los productores agropecuarios, en donde la línea anti-reformista comenzaba a ganar posiciones. Poco tiempo después, los dirigentes anti-reformistas de CARBAP ganaron en elecciones la dirección de CRA, y comenzaron a propiciar el retiro de la entidad de la Comisión de Política Concertada (*Memoria y Balance 1973-1974*: 347-348). El mantenimiento de los niveles de renta diferencial apropiados por el gobierno nacional, en un contexto en que la crisis económica internacional comenzaba a golpear al país, fue un elemento decisivo para explicar este cambio de clima (Iñigo Carrera, 2007). Una hábil campaña desplegada por los sectores anti-reformistas contra un proyecto oficial que apuntaba a reformar la estructura de tenencia de la tierra,⁵ duramente cuestionado en términos que lo asimilaban a propuestas “colectivizantes” y de tintes “marxistas”, fue otro de los elementos que ayudó a volcar la balanza en su favor (Aguado, 1977: 92 y 114; SRA: *Memoria y Balance 1973-1974*). Por último, el funcionamiento de la Comisión de Política Concertada, en donde poco caso hacía el gobierno a las objeciones de las corporaciones rurales (*La Tierra*, 6/6/1974; *Cronista Comercial*, 11/6/1974; *La Nación*, 26/6/1974), terminó de definir a los más reacios para sumarse a la entente anti-reformista promovida inicialmente por CARBAP.

Hacia junio de 1974, dirigentes de CRA, SRA y CONINAGRO conformaron una comisión que discutiría las bases de un frente común. A ellos se sumó un sector interno de FAA, comandado por Antonio Di Rocco, que desde 1973 cuestionaba la política agropecuaria peronista y a la propia dirección de FAA que la defendía. Una solicitada aparecida el 10 de julio de 1974 daba cuenta del espíritu que animaba a esta comisión:

⁵ Nos referimos al Anteproyecto de Ley Agraria, elaborado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que comenzó a discutirse públicamente a mediados de 1974. El anteproyecto reunía una serie de medidas que apuntaba a transformar la estructura agraria. En términos generales, planteaba que la tierra debía cumplir una “función social”, lo que relegaba a un segundo plano la función privada de la propiedad. Sobre la base de ese criterio, la ley establecía pautas por las cuales el propietario podría perder el “dominio” sobre la tierra si no la explotaba a su máxima capacidad potencial. La extinción del dominio habilitaba al Estado a expropiar (con pago en bonos) las tierras, o a cederlas compulsivamente en arriendo. A su vez, la ley sancionaba el “latifundio”, aumentando la presión sobre los grandes propietarios y apuntaba a corregir las tendencias al minifundio, limitando la subdivisión por herencia y generando instrumentos para la “reconcentración parcelaria”. También establecía criterios para la colonización y ampliación de la frontera agropecuaria, dando prioridad a la formación de cooperativas sobre las nuevas tierras puestas en producción con la intervención del Estado. Las resistencias que el proyecto encontró dentro de la burguesía agropecuaria, y también dentro del propio gobierno peronista, llevaron a que éste nunca llegara a remitirse a las cámaras legislativas para su sanción.

Los productores y sus entidades tienen coincidencias básicas fundamentales. Por ello LA UNIÓN DEL AGRO, profundamente sentida y permanentemente solicitada por todos los hombres del campo DEBE CONVERTIRSE EN REALIDAD. Es necesario en esta hora de unidad, demostrarla, creando una ENTIDAD CENTRAL AGROPECUARIA, que reúna a las entidades del agro en función de su representatividad (*La Nación*, 10/7/1974, las mayúsculas corresponden al original).

Más allá de las intenciones declaradas, la conformación de un frente unitario se demoró varios meses. Es que la división en el agro persistía y no todos estaban igualmente convencidos de estructurar un frente opositor al gobierno. La dirección de CRA, ya dominada por el anti-reformismo, impulsó una serie de asambleas (a las que se sumó también SRA) para ganar apoyo en favor de la unidad, apelando a la presión de las bases en ese sentido (Aguado, 1977: 104-105; *La Nación*, 20/7/1974 y 25/8/1974). Sin embargo, la dirigencia de CONINAGRO no parecía dispuesta a romper sus vínculos con el gobierno y, FAA combatía decididamente esta iniciativa unitaria. Esta corporación caracterizaba que el frente que se estaba conformando iba en contra de sus principios, ya que aspiraba a bloquear toda iniciativa reformista recurriendo incluso a un golpe de estado si era necesario. En el 62° Congreso Anual de FAA, su presidente, Humberto Volando, advertía que

Algunos grupos [...] retomaban el tortuoso camino del atajo para iniciar desde allí, con toda premura, su acción deteriorante sobre las convalecientes y recién conquistadas instituciones. Estos son los grupos que no están dispuestos a acatar nunca lo que resuelven las mayorías [...] porque ello hiere sus privilegios o no les permite imponer sus dogmas [...] Hoy somos testigos de la desenfundada carrera que se disputan para instaurar en el país un poder espúreo (sic.) (*La Tierra*, 3/10/1974).

La referencia al frente agropecuario en gestación era clara, por eso Volando advertía que “de poco valdría coincidir en el precio del trigo, la uva o el algodón, si discrepamos sobre estos principios tutelares. Nunca dejemos de pensar con la cabeza aunque nos duela el bolsillo” (*La Tierra*, 3/10/1974). Atendiendo a estos planteos debía FAA evaluar su acción, y velar para no plegarse a reclamos gremiales que terminarían llevando a la entidad a asumir posiciones golpistas: “estar por la legalidad no significa solamente permanecer apartado de la conjura y la asonada, sino comprometerse a no contribuir a crear el clima propicio para que la misma prospere” (*La Tierra*, 3/10/1974). Con estos argumentos, FAA se marginó de las reuniones para acordar un frente común. A pesar de las presiones de la dirigencia de CARBAP, que llamaba a conformar el frente sin FAA, recién en diciembre de 1974 las negociaciones alcanzaron buen puerto. Entonces, con la integración de CRA, SRA y CONINAGRO, se conformó finalmente el Comité de Acción Agropecuaria (CAA), unificando a las corporaciones dispuestas a enfrentar la política agropecuaria oficial.

Pero el clima político y económico a comienzos de 1975 era muy diferente al del primer año de gestión peronista. Los precios internacionales agropecuarios se derrumbaron, privando al país de su principal ingreso de divisas. El deterioro de los términos de intercambio había profundizado las dificultades económicas, lo que llevó a la renuncia del ministro de Economía y dirigente de la CGE, José Ber Gelbard, a fines del '74. Su reemplazante, Gómez Morales, intentó avanzar con un plan de ajuste que se demoraba y congeló toda iniciativa reformista en materia agropecuaria. Sin embargo, los niveles de exacción de renta agraria no disminuyeron, lo que en un contexto de retracción de los precios internacionales, implicaba un fuerte aumento de la carga sobre el sector agropecuario. La conjunción de estos elementos llevó al conjunto de la burguesía agropecuaria a la oposición contra el gobierno, lanzándose a un proceso de movilización que no haría más que intensificarse a lo largo del año.

Desde enero de 1975 comenzaron a estallar una serie de conflictos regionales, que llevaron a distintas seccionales de FAA a comandar movilizaciones y “paros” en reclamo de mejores ingresos para el agro. El descontento terminó siendo canalizado por el CAA, que en marzo de 1975 lanzó el primero de una serie de paros agropecuarios nacionales. Sin embargo, tras ese paro el frente se disolvió, ya que ni CONINAGRO ni SRA se mostraban convencidos de profundizar la movilización contra el gobierno. Tras la disolución del CAA, quienes se encontraban a la cabeza de los sectores movilizadas en ambos bloques dejaron de lado sus diferencias para unirse en el reclamo contra los precios fijados por el gobierno, que consideraban insuficientes. Así, en abril se conformó un frente entre FAA y CRA, que impulsaría el resto de los paros agropecuarios nacionales de 1975.

En mayo, FAA y CRA convocaron a un paro ganadero de alcance nacional, de tres días de duración. En junio, convocarían a un nuevo paro, de productores lecheros, también por tres días. A este paro se sumaría SRA, que desde ese momento acompañó las protestas convocadas por FAA y CRA. En la segunda mitad del año, con buena parte de la burguesía lanzada ya a una ofensiva golpista, FAA, CRA y SRA convocaron a dos nuevas acciones. En septiembre el paro duró 11 días, y en octubre 18, causando serios problemas de abastecimiento y aumentos de precios en un contexto ya signado por la inflación. FAA parecía haber olvidado sus propios argumentos para marginarse de la iniciativa unitaria impulsada por CRA apenas unos meses antes: que de ninguna manera se unirían a quienes intentaban imponer un “poder espúreo”, aunque pudieran coincidir con estos sectores en “el precio del trigo”. Los paros impulsados por SRA, FAA y CRA contribuyeron claramente a desestabilizar a un gobierno golpeado, que no atinaba a ofrecer respuestas a una profunda crisis social y política (Sanz Cerbino, 2009).

Así, luego del impasse ocasionado por el retorno del peronismo, las tendencias unitarias en el agro volvían a imponerse. Como en 1970, el elemento aglutinante era la defensa de una ganancia extraordinaria, la renta diferencial de la tierra, disputada por diferentes sectores. Si durante 1973 y 1974 los niveles de exacción resultaron tolerables por los altos ingresos derivados de precios internacionales excepcionales, cuando estos precios se derrumbaron hacia 1975 la necesidad de abroquelarse en su defensa resurgió. Y así se impuso, sin dilaciones, una confluencia largamente debatida entre 1973 y 1974.

Reflexiones finales

A lo largo de este artículo hemos reconstruido los debates promovidos por la dirigencia corporativa del agro pampeano en torno al problema de la “unidad” del sector entre fines de la década de 1950 y mediados de la década de 1970. Hemos intentando reflejar las posiciones a favor y en contra, las divergencias en torno a los contenidos políticos que los actores daban a esa “unidad”, y cómo estos variaban en función de las urgencias impuestas por la coyuntura política y económica. También avanzamos en el análisis de las iniciativas concretas que buscaron la confluencia de las corporaciones rurales pampeanas en un frente común. Algunas de ellas, como hemos visto, fructificaron en la concreción de frentes corporativos en los que se alcanzó, total o parcialmente, el objetivo declamado de la “unidad” corporativa del agro pampeano. Fueron experiencias efímeras, cuyas limitaciones intentamos marcar. Sin embargo, el hecho de que el problema fuera motivo de debate, y que incluso se arribara a experiencias unitarias concretas, con sus limitaciones, muestra un cambio significativo respecto a la primera mitad del siglo XX, cuando las diferencias entre las corporaciones impedían acercamientos de esta naturaleza. Creemos por ello que, para entender las experiencias recientes de confluencia entre las corporaciones agropecuarias pampeanas, debemos remontarnos al período histórico en que el problema de la unidad corporativa comienza a aparecer como horizonte posible. Este artículo es un aporte en este sentido.

Bibliografía

- Barsky, O. (1997). La información estadística y las visiones sobre la estructura agraria pampeana. En O. Barsky y A. Pucciarelli (Eds.), *El agro pampeano. El fin de un período* (pp. 15-204). Buenos Aires: FLACSO; Oficina de Publicaciones del CBC-UBA.
- Barsky, O. y Pucciarelli, A. (1991). Cambios en el tamaño y en el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas. En O. Barsky (Ed.), *El desarrollo agropecuario pampeano* (pp. 309-454). Buenos Aires: GEL.
- Balsa, J. (2011). Chacareros en la gran ciudad. En M. Lobato (Ed.), *Buenos Aires. Manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX* (pp. 177-202). Buenos Aires: Biblos.
- Balsa, J. y López Castro, N. (2011). Transformaciones socioproductivas, actores sociales y modelos de desarrollo rural en disputa. Reflexiones en torno al conflicto agrario reciente en la Región Pampeana. En J. Muzlera, M. Poggi y X. Carreras Doallo (Comps), *Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-2010)* (pp. 141-162). Buenos Aires: Ciccus.
- Barsky, O. y Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Basualdo, E., Arceo, E. y Arceo, N. (2009). *La crisis mundial y el conflicto del agro*. Buenos Aires: CCC; UNQ; Página /12.
- Gras, C. (2011). Conflicto agrario, actores sociales y la construcción política del “campo”. En J. Muzlera, M. Poggi y X. Carreras Doallo (comps.), *Aportes, sujetos y miradas del conflicto agrario argentino (1910-2010)* (pp. 39-64). Buenos Aires: Ciccus.
- De Imaz, J. L. (1967). *Los que mandan*. Buenos Aires: Eudeba.
- Giberti, H. (1970). *Historia económica de la ganadería argentina*. Buenos Aires: Solar.
- Íñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Lattuada, M. (2006). *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina*. Buenos Aires: UNQ.
- Lázzaro, S. (2005). El Estado y las políticas agrarias: concepciones y estrategias en el contexto de la crisis hegemónica de la clase dominante (1955-1969). En S. Lázzaro y G. Galafassi (comps.), *Sujetos, política y representaciones del mundo rural. Argentina 1930-1975* (pp. 165-235). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Lissin, L. (2010). *Federación Agraria hoy. El campo argentino en discusión*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Manzetti, L. (1992): The evolution of agricultural groups in Argentina. *Journal of Latin American Studies*, 24 (65), 585-616.
- Makler, C. (2006): Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista. En O. Graciano y T. Gutiérrez, *El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000* (pp. 181-207). Buenos Aires: Prometeo.
- Makler, C. (septiembre, 2008). Las organizaciones gremiales agropecuarias durante el peronismo y la “Revolución Libertadora”: respuestas y desafíos en tiempos de cambio (1946-1958). En *XXI Jornadas de Historia Económica*. Buenos Aires, Argentina.
- Martínez Nogueira, R. (1985). *Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. Notas para un ensayo interpretativo de sus comportamientos*. Buenos Aires: CISEA. 1985.
- Míguez, M. C. (2013). ¿Anticomunistas, antiestatistas, antiperonistas? La “nacionalización” de la doctrina de seguridad nacional en la Argentina y la legitimación del golpe de Estado de 1966. *Revista SAAP*, 7 (1), 65-95. Recuperado de <http://www.saap.org.ar/esp/docs-revista/revista/pdf/7-1/Miguez.pdf>
- O'Donnell, G. (2009). *El estado burocrático autoritario*. Buenos Aires: Prometeo.
- Palomino, M. (1988). *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*. Buenos Aires: CISEA; GEL.
- Palomino, M. (1989). *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*. Buenos Aires: CISEA.
- Pérez Trento, N. (2014). *Transformaciones en la estructura social agraria pampeana y acción política de las organizaciones agrarias. El caso de Federación Agraria Argentina (1990-2008)*. (Tesis de maestría no publicada). Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.
- Poggi, M. (2012). El desvanecimiento del discurso reformista. El rol de la prensa argentina en la cuestión agraria durante 1975 y 1976. *Global Media Journal*, 9 (18), 1-15.

El debate acerca de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas en la... Gonzalo Sanz Cerbino

Pucciarelli, A. (1997). Las grandes estancias de la pampa bonaerense. En O. Barsky y A. Pucciarelli (Eds.), *El agro pampeano. El fin de un período* (pp. 293-321). Buenos Aires: FLACSO-Oficina de Publicaciones del CBC-UBA.

Salvia, S. (2014). Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la "Mesa de enlace". *Mundo Agrario*, 15 (28), 1-30.

Sanz Cerbino, G. y Baudino, V. (2013). El tercer gobierno de Perón y la fractura de la clase dominante. *Estudios del ISHIR*, 3 (6), 84-110. Recuperado de <http://web2.rosario-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR/article/view/275>

Sanz Cerbino, G. (2009). Tiempos violentos. Los paros agrarios de 1975 y la estrategia golpista de la burguesía. *Anuario CEICS*, (3), 33-61. Recuperado de http://www.ceics.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=28

Sanz Cerbino, G. (2014). Antecedentes históricos de la unidad de las corporaciones agropecuarias pampeanas. La formación de la Comisión de Enlace y la disputa por la renta. *Mundo Agrario*, 15 (29), 1-33.

Sartelli, E. et al. (2008): *Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo-julio 2008*. Buenos Aires: Ediciones ryr.

Slutzsky, D. (1968). Aspectos sociales del desarrollo rural en la pampa húmeda argentina. *Desarrollo Económico*, (29), 95-135.

Smith, P. (1986). *Carne y política en la Argentina*. Buenos Aires: Hyspamérica.

Fuentes

Aguado, Jorge. *Cuatro años de acción gremial*. Buenos Aires: CARBAP. 1977.

CARBAP: *Memoria y Balance 1973-1974*.

Clarín (periódico de circulación nacional), varios años.

CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO. *El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones*. Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

Cronista Comercial (periódico de circulación nacional), varios años.

La Nación (periódico de circulación nacional), varios años.

La Tierra (semanario oficial de FAA), varios años.

FAA: *Política agropecuaria efectiva*, CERO. Rosario, 1965.

FAA: *58º Congreso Anual. Conclusiones*. Rosario, 1970.

SRA: *Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966*.

SRA: *Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1973-1974*.